

Crónica del mes Febrero-Marzo - 2006

Los partidos políticos y sus candidatos habían ya delineado sus ofertas electorales para convencer al cuerpo de votantes salvadoreños. La movilización de militantes y simpatizantes era ya masiva en las principales ciudades y localidades del país, cuyos espacios públicos lucían abarrotados de propaganda electoral multicolor. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) daba por iniciada la campaña para alcaldes y diputados y los medios de comunicación emitían los mensajes partidistas por doquier. Los salvadoreños atravesaban la última fase del proceso electoral encaminado a elegir los concejos municipales y la legislatura que fungirían desde el 1° de mayo próximo hasta el 2009. Los comicios legislativos y municipales, pues, fueron el principal punto de agenda en la opinión pública nacional durante los meses de febrero y marzo de 2006.

En ese marco, había poca cabida para otros asuntos de interés público, pero, sin lugar a dudas, la situación de violencia social que atraviesa el país se escapó de esa tendencia. Muchos sectores nacionales volvieron a insistir en la necesidad de adoptar medidas eficaces para detener la imparable ola de asesinatos que padecen los salvadoreños. La estrategia gubernamental no ha cambiado mucho desde que inició el año, pese a la entrada en escena del nuevo director de la Policía. Las críticas hacia dicha estrategia no han callado como tampoco han disminuido las estadísticas lamentables: más de diez homicidios diarios. De este modo, elecciones y violencia social han sido parte de la cotidianidad para los salvadoreños durante los meses en cuestión. En muchos casos, la violencia y la política —junto con una gran dosis de fanatismo— se mezclaron para dar como resultado hechos lamentables de violencia entre simpatizantes de uno u otro partido. Hasta el cierre de la campaña electoral, los medios informativos reseñaron todo tipo de enfrentamientos surgidos al calor de las consignas y los discursos subidos de tono.

El escenario prevaleciente en ambos meses queda completado con un pronunciado deterioro de la convivencia social entre los salvadoreños, una de cuyas manifestaciones es precisamente la situación de la violencia; pero es un deterioro que abarca aspectos socioeconómicos como el alto costo de la vida, la escasez de fuentes de empleo, la congelación de los salarios y el limitado acceso a servicios sociales básicos de calidad. Un deterioro que expulsa anualmente a miles de salvadoreños hacia fuera de las fronteras nacionales. A la par de lo anterior, el gobierno de Elías Antonio Saca le ha seguido apostando a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la región centroamericana (CAFTA, por sus siglas inglesas) que, a juicio de sus gestores, vendría a ser la llave para mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. Pero la realidad ha sido otra: las manifestaciones de ese deterioro apuntado líneas arriba impone una mirada escéptica ante el desmedido optimismo gubernamental.

Política

El capítulo electoral, se ha afirmado líneas arriba, ha sido el más relevante en la agenda de la opinión pública salvadoreña durante los meses en cuestión. Las fechas relevantes han sido muchas y hay que contarlas. Pero la constante es la misma: un estancamiento del impulso democratizador surgido del espíritu de los acuerdos de paz, cuando no un franco retroceso. Así, el 10 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral dio inicio oficialmente a la campaña electoral para elegir alcaldes y sus respectivos concejos municipales, aunque, en la práctica, los diferentes partidos políticos habían arrancado desde meses antes, ante la pasividad del TSE. Dicho comportamiento fue más evidente en el partido ARENA, que no ha dejado de utilizar su maquinaria propagandística desde que Elías Antonio Saca aspiraba a la presidencia de la República, en el año 2004.

Un día después, el 11, el presidente de la República, precisamente, se involucraba de lleno en la campaña electoral con su parti-

do, en la ceremonia de inicio de campaña celebrada en un local de la Feria Internacional, en San Salvador. Simultáneamente, el FMLN, con la figura del fallecido líder Schafik Handal, dio inicio de manera oficial a la campaña electoral para elegir alcaldes, convocando a sus militantes en varias calles de la ciudad capital. Los dos partidos mayoritarios, pues, arrancaban la carrera por los puestos de poder en disputa. El resto de partido políticos, desde sus posibilidades, intentaban hacer lo suyo.

El 12, algunos medios de prensa revelaron que los magistrados del TSE habían gastado, hasta ese día, en concepto de viáticos para viajes, un total de 180 000 dólares. Walter Araujo, magistrado presidente y representante del partido ARENA, es quien más había viajado, recibiendo una suma de 33 270 dólares. A Araujo le seguía Eugenio Chicas, del FMLN, con 24 337.50 dólares. La prensa destacó que los viajes no siempre tuvieron la finalidad de aprender experiencias electorales de otros países, como en el caso del representante del PCN en el tribunal, Julio Moreno Niños, quien recibió 1 200 dólares en viáticos para asistir a un seminario sobre seguridad, economía y medio ambiente realizado en Panamá. “Fui a eso y aproveché después para reunirme con las autoridades del tribunal electoral de Panamá”, afirmó el magistrado peacenista, cuestionado por periodistas.

El 23, en el marco de la campaña y como parte de una estrategia electoral, el candidato de ARENA para disputarse la alcaldía capitalina, Rodrigo Samayoa, fue condecorado por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), organismo del que fuera su presidente años atrás. Samayoa, desde la ciudad de Guatemala y ante la notable ausencia de diputados salvadoreños, aprovechó el espacio para hacer proselitismo a su favor. Luego, se reunió con el jefe municipal de la ciudad capital de aquel país, Álvaro Arzú.

El proceso electoral continuó durante el mes de marzo, a medida que se acercaba el día de los comicios. Así, el día 1° de marzo, los medios informativos reseñaban el fracaso

del sistema informático previsto para el escrutinio preliminar de las elecciones del 12 de marzo. En consecuencia, el TSE descartaba el recuento de votos digitalizado. Días después, el 8, se dio un cierre de campaña electoral violento. La plaza Gerardo Barrios, en San Salvador, fue escenario de golpes entre militantes del FMLN y del PDC, acto al que se sumaban enfrentamientos entre los militantes y simpatizantes de todos los partidos.

Con la campaña finiquitada solo se estaba a la espera del evento electoral, que se realizó el domingo 12 de marzo, día en el que unos 2 millones de salvadoreños celebraron su derecho ciudadano al elegir a los 262 alcaldes, 84 diputados y 20 legisladores del PARLACEN. Un día después, el presidente de la República, Antonio Saca, proclamaba ganador de la alcaldía capitalina al candidato de su partido. “Le daré todo el apoyo a Samayoa, tras haber recuperado la administración de la alcaldía de San Salvador”, afirmó el mandatario. Mientras tanto, el TSE presentaba los primeros consolidados tras horas de espera.

El 14, la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló algunas fallas en los comicios del día 12. Los inconvenientes señalados fueron la tardanza en la apertura de algunos centros de votación, inconvenientes con el uso del plumón indeleble y la realización de actividades proselitistas. El 16, finalmente, el TSE declaró ganadora de la alcaldía de San Salvador a Violeta Menjivar, candidata del FMLN, por una diferencia de 59 votos sobre su adversario de ARENA. Este último aceptó la derrota, pero dijo estar convencido de pelear la candidatura nuevamente en el 2009. “Considero mi capital político, y este triunfo, este empate, la experiencia y la aceptación de la mitad de los capitalinos. ¿Qué más potencial para una futura candidatura?”, comentó el aspirante arenero.

En todo caso, el lapso de tiempo comprendido entre el cierre oficial de las elecciones, pasadas las 5 de la tarde del 12 de marzo, y la declaratoria oficial de los resultados municipales en la capital, merece un aná-

lisis detenido. Al final del miércoles 15, el Tribunal Supremo Electoral todavía no había oficializado al ganador de la alcaldía capitalina, prolongando la incertidumbre de los electores, sobre todo de los que dieron el voto a la candidata del FMLN, Violeta Menjivar, quienes se apostaban en algunas zonas de la capital para protestar ante la tardanza del TSE. Los otros resultados estaban más o menos claros: una victoria contundente de ARENA en el ámbito municipal y en el ámbito legislativo, al incrementar la cantidad de curules, con respecto a la legislatura todavía vigente. Por otro lado, una más tímida victoria del FMLN en algunas municipalidades simbólicas del país, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador, donde ARENA solo retuvo la comuna de Antiguo Cuscatlán. El principal partido de oposición también se habría agenciado una poblada fracción legislativa, suficiente como para obligar a la negociación con la bancada oficialista. Aun así, el FMLN perdió muchas alcaldías y estuvo lejos de obtener 43 diputados, que fue la meta autoimpuesta. Como quiera que sea, hay algunos aspectos sobre los que hay que volver, en el marco de esas horas de incertidumbre.

Una de las instituciones más cuestionadas fue el Tribunal Supremo Electoral, por la tardanza en emitir los resultados y por la discrecionalidad con que sus principales magistrados manejaron todo el proceso electoral. Si se atiende a los antecedentes, estos son más bien negativos. Y es que el TSE ya se había granjeado una serie de críticas por su excesiva partidización, lo cual le ha restado objetividad e imparcialidad hasta la fecha. A todas luces, el accionar de esa institución respondió, en buena medida, a los criterios partidistas. Y esto se vio reflejado en el periodo de tiempo en cuestión.

Desde que las urnas fueron cerradas para los salvadoreños, los magistrados del TSE no respetaron los tiempos fijados por ellos mismos. El caso más llamativo fue el de los resultados municipales por San Salvador, que fueron postergados innecesariamente, bajo el argumento de que fueron sumamente cerrados. Sin embargo, desde el 13 de marzo, las

tendencias ya beneficiaban a la candidata del FMLN. La tardanza del TSE fue leída por el partido de izquierda y por muchos sectores sociales como un pretexto para encubrir la victoria efemelenista o, lo que era peor, para tramar un posible gane ilegal del candidato de ARENA, tomando en cuenta que difícilmente ese partido aceptaría la derrota.

La tardanza del TSE habría provocado que se caldearan los ánimos entre los simpatizantes de Menjívar, quienes se agolparon en las afueras del local donde los magistrados del TSE hacían el recuento manual de los votos. Lo que sucedió mientras protestaban es confuso: elementos de la Policía Nacional Civil, que habían sido desplegados para evitar que los manifestantes irrumpieran en las instalaciones donde se hallaban los magistrados, hirieron por lo menos a siete de los manifestantes. La mayoría de los medios dijo que los protestantes provocaron y atacaron a los agentes del orden; otros medios sostuvieron la versión contraria. El punto es que siete personas resultaron lesionadas en una situación alimentada por la incapacidad del TSE en respetar los tiempos que sus mismos magistrados se habían fijado.

El mismo día de las elecciones, los dos partidos mayoritarios celebraban por sus ganancias respectivos. También el PDC y el PCN, pero en menor medida. El CD, por su parte, hacía los cálculos respectivos para no desaparecer del mapa electoral y el PNL se resignaba a morir con un escaso respaldo popular. El fracaso de ARENA en San Salvador fue un duro golpe para todo el aparato partidario y estatal, pues Samayoa contó con un poderío mediático y financiero sin par. El mismo presidente de la República se despojó de su investidura presidencial para hacer campaña a favor del ungido arenero para disputarse la capital. Samayoa, pues, tenía todo para hacerse del poder. Solo le faltaba la prueba de fuego en las urnas y falló en su intento.

Menjívar, por otra parte, desarrolló una campaña más modesta, enfocándose en discutir con el resto de contendientes, excep-

tuando al de ARENA, los principales problemas de la capital. En este sentido, la candidata efemelenista mostró mayor altura y personalidad, ante la ausencia de su contrincante arenero en los debates organizados por diferentes medios televisivos y radiales. ARENA quiso repetir la pedantería de Saca, al negarse a debatir con sus adversarios, pero solo dejó en evidencia la falta de personalidad de su candidato. El colmo tocó el bochorno: Samayoa aparecía visiblemente ebrio al final de ese 12 de marzo.

Dentro de ARENA, el presidente de ese partido también desarrolló un papel que dejó muchas dudas sobre su vocación democrática. Él mismo fue el que levantó las manos a Samayoa para declararlo ganador, cuando las tendencias ya lo desmentían. Saca tendría que dar explicaciones a la ciudadanía por el papel jugado, no solo en el período en cuestión, sino en el marco de toda la campaña electoral. Saca, como ningún otro ex presidente lo había hecho, empeñó su figura para apostarle a un poder casi absoluto para su partido, y la victoria de ARENA se torna ridícula si se compara con el arsenal que quemó para tan poco. Y es que ARENA y su presidente se movieron para obtener un respaldo mayor al que han obtenido. Por eso, ARENA ha ganado, pero está por medirse el desgaste del presidente de la República y la institucionalidad que él representa.

Por otro lado, puede decirse que los medios informativos llenaron el vacío dejado por el Tribunal Supremo Electoral durante esos días de incertidumbre. Buena parte de ellos se mantuvo pendiente del desenlace de las elecciones y del proceso de recuento. Bastaba pasearse por las distintas frecuencias televisivas y radiales para enterarse, al menos, de algunos datos que a cuenta gotas relevaba el TSE. En la televisión, los conductores de programas se rodearon de analistas que exponían sus visiones a cerca de los hechos. En el ámbito de la prensa escrita también hubo una gran cobertura del proceso, pero se fue menos crítico que en la radio y la televisión, donde se evidenció una mirada

crítica hacia las instituciones involucradas en el proceso.

Cerrado el proceso electoral llegaba el momento de volver a los asuntos más importantes de la sociedad salvadoreña. En consonancia con ello, el 19 de marzo, el presidente Antonio Saca dirigió un mensaje a la nación, mediante el cual hizo un llamado al entendimiento nacional luego del clima tenso generado por las elecciones. “Acordemos construir juntos una agenda de nación incluyente, responsable y visionaria; una agenda mínima de puntos que nos permitan avanzar como país, en donde todos lleguemos con una agenda abierta sin pedir cosas imposibles”, exhortó el mandatario. Hasta la fecha, algunos medios de prensa ya hacían eco de los resultados oficiales de los comicios. De acuerdo a los mismos, el partido ARENA se habría quedado con 147 alcaldías; el FMLN, 54; el PCN, 39; el PDC, 14; y el CD, 2. Asimismo, la legislatura que fungirá desde el 1 de mayo próximo tendrá 34 diputados de ARENA, 32 del FMLN, 10 del PCN, 6 del PDC y 2 del CD.

El 21, el periódico *La Prensa Gráfica* revelaba algunas conclusiones interesantes sobre los resultados. Según la encuesta de boca de urna realizada por ese medio el día de los comicios, el votante que se inclinó hacia la derecha “está más enraizado entre las mujeres amas de casa, los residentes del área rural y las personas de menor escolaridad e ingresos”, mientras que los partidos de izquierda tuvieron mayor aceptación entre los “hombres, los residentes del área urbana y las personas de mayor escolaridad y de ingresos medios”. Sin duda, son datos muy interesantes y útiles para los mismos partidos políticos.

Siempre en materia política trascendió, durante ambos meses, el proceso de elección de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y es que desde finales del mes de febrero, la prensa nacional empezó a darle continuidad a esa otra elección no menos importante. Así, de acuerdo a notas de prensa, el día 21 de febrero, la Asociación Salvadoreña de Abogados (ASDA) y la Asociación

de Magistrados y Jueces de El Salvador (AMJUES) firmaron una alianza con miras a las elecciones de los 15 candidatos a magistrados de la Corte, evento programado para el 18 de marzo.

El debate continuó durante marzo: el 15 de ese mes, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDADES) iniciaron formalmente el periodo de elección para los candidatos a magistrados, de modo que, el día 18, unos cinco mil jueces acudieron a elegir a los 15 candidatos que se presentarían a los diputados de la Asamblea Legislativa para elegir, de entre los otros 15 candidatos presentados por el Consejo Nacional de la Judicatura, los 5 magistrados de la Corte Suprema. Pese a la concurrencia de votantes, uno de los jueces, el ahora procurador general de la República, Marcos Gregorio Sánchez, dijo que los diputados se inclinan por el criterio político para elegir a los magistrados y no por los criterios técnicos. Los profesionales de la justicia, pues, dejaron en manos de los diputados de la Asamblea Legislativa la elección de los cinco magistrados, un asunto que, como se verá enseguida, fue motivo de estériles discusiones en el seno legislativo.

De cualquier forma, la dinámica política nacional se mudó al ámbito parlamentario desde el cierre del proceso electoral. El 20 de marzo, el presidente Antonio Saca se pronunció por una reforma constitucional que permitiera la celebración de elecciones generales en El Salvador, de modo que al alargarse las gestiones municipales y legislativas en cinco años, se realicen comicios para elegir presidente, diputados y alcaldes. “No es posible que cada 20 meses El Salvador esté sometido a eventos electorales; desgastan, cuesta dinero y de alguna manera le meten incertidumbre al país”, comentó Saca. Asimismo, hasta el 21, la prensa nacional manejaba ya las intenciones de la fracción legislativa de ARENA para alcanzar acuerdos parlamentarios que permitieran la elección del fiscal general de la República, los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la aprobación de unos 500 millones de dóla-

res en préstamos internacionales que serían utilizados para financiar proyectos del Ejecutivo. Las notas de prensa apuntaban al llamado G-13, es decir, a los 13 diputados del CD, PPSC y FDR que tendrían la llave para aprobar, junto con los legisladores de ARENA, aquellas mociones. La prensa también destacó las instrucciones que el presidente de la República y de ARENA hiciera a la fracción oficial en el Parlamento, para que se llegara a los necesarios acuerdos.

Ese mismo día 21, *La Prensa Gráfica* entrevistó al diputado Héctor Silva, del CD, quien se había convertido a la fecha en el vocero del G-13. A juicio de Silva, todavía faltaba que ARENA cumpliera algunos acuerdos que quedaron pendientes desde que el bloque que representa dio sus votos para que el año pasado se aprobara el presupuesto general de la nación correspondiente a 2006. “De lo que deben —dijo Silva—, el tema complicado es el del endeudamiento y pensiones. Eso es lo complicado, pero no lo único. Primero, los bolsos: ya hay un cumplimiento parcial, pero necesita terminarse. Y hay más: calles, despidos de Gobernación y el fortalecimiento del fondo de mitigación de riesgos, y reparación del sistema de drenajes de San Salvador”, dijo.

El 23, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) secundó las intenciones del presidente Saca, en el sentido de ampliar el mandato de los alcaldes y diputados a cinco años, de modo que se celebren elecciones generales a partir de 2009. A juicio de Antonio Cabrales, presidente de la fundación, “nuestra energía se distrae de la producción, se crea incertidumbre al confrontar a la sociedad y esta se afecta por la falta de creación de empleos”. Paralelamente, FUSADES demandó la adopción de otras medidas, como la regulación de los gastos de campaña y el tiempo de acceso a los medios, así como la ampliación del voto residencial a todo el país y el voto en el exterior para las próximas presidenciales.

El 29, el presidente Saca se volvió a pronunciar a favor de que la Asamblea Legislativa resuelva los temas pendientes que se han

señalado líneas arriba. “Yo le hago un llamado a los diputados para que en conjunto, toda la clase política, mandemos una señal de entendimiento y elijamos lo más pronto posible a los funcionarios. Sería un buen mensaje de concertación”, dijo Saca. El mes de marzo se iba, pues, con una intensa discusión política en el seno de la Asamblea Legislativa, donde la fracción oficial coqueteaba con el resto de fuerzas opositoras para cumplir con las instrucciones giradas por el mismo presidente de la República. El FMLN, firme en oponerse a la elección del fiscal y de los magistrados de la Corte, se mantenía al margen de las negociaciones.

Finalmente debe reseñarse un acontecimiento político relevante para las víctimas del conflicto armado. Y es que el día 22 de marzo, en una ceremonia celebrada en la catedral de Chalatenango y atendiendo una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el canciller salvadoreño Francisco Laínez lamentó la desaparición de niños y niñas durante el conflicto armado. Acompañado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, y de la procuradora de derechos humanos, Beatrice de Carrillo, Laínez dijo que “el Estado de El Salvador lamenta profundamente todos los hechos ocurridos durante el conflicto armado que imperó en nuestro país por más de doce años y que afectó directamente a todas las familias salvadoreñas y primordialmente aquellos que han involucrado a nuestra niñez. Especialmente lamenta los hechos relacionados con Erlinda y Ernestina Serrano Cruz”. Posteriormente, los familiares de las niñas desaparecidas durante la guerra reclamaron a Laínez la ausencia del presidente Saca en la ceremonia, así como la no mención de la palabra “perdón”. “Este es un acto propagandístico y no es como la corte lo determinó”, comentó uno de los familiares.

Días después, el 25, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) denegó un comunicado público en el que denunciaba que el Estado salvadoreño no solo no cumplió con su obligación de pedir perdón efectivo a los familiares de las hermanas

Serrano, incumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que se burló nuevamente de las víctimas. “El miércoles 22 de marzo, el Estado ofendió aun más a la familia Serrano Cruz y al resto de víctimas salvadoreñas, además de descubrir su verdadero rostro ante la comunidad internacional respetuosa de los derechos humanos”, rezaba parte del comunicado público. El IDHUCA instó al mandatario salvadoreño a emular a sus similares de Guatemala, Óscar Berger, y al ex presidente hondureño, Ricardo Maduro, quienes sí pidieron perdón en nombre de sus respectivos Estados por crímenes cometidos en sus países durante el pasado.

Sociedad

Habiendo reseñado a grosso modo algunos elementos de la dinámica política salvadoreña durante estos dos meses, hay que apuntar algunas líneas sobre el marco social del que fue parte. Y en este punto, de nueva cuenta, destaca el problema de la violencia social que atraviesa el país. Junto a él, durante febrero, la opinión pública volvió sobre el tema de la vulnerabilidad socioambiental —ante la inminencia del invierno—, las migraciones —ante la extensión del TPS para los salvadoreños en Estados Unidos— y la salud pública —frente a otro repunte de emergencias atendidas en los hospitales nacionales a causa de enfermedades gastrointestinales en niños—.

Febrero iniciaba con una nota comprometedor para la institución nacional encargada de salvaguardar la seguridad pública: un día antes, el 31 de enero, fueron capturados siete agentes del sistema de emergencia 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados de aceptar sobornos y filtrar información a delincuentes y narcotraficantes. Tres días después, el 2 de febrero, la prensa nacional mantenía en su agenda otras irregularidades detectadas en el cuerpo policial. El mismo director de la Policía, Rodrigo Ávila, admitió que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba a un grupo de agentes de quienes se sospechaba las mismas conductas que

los detenidos a finales de enero: “son hechos delictivos que no vamos a tolerar. Estamos haciendo varias investigaciones sobre agentes que han pedido dádivas, que han cometido hechos de corrupción, que tienen contacto con las pandillas y les pasan información”, puntualizó el jefe policial.

Por otro lado, ese mismo día 2, el rotativo *La Prensa Gráfica* reveló detalles de las estadísticas manejadas por la PNC sobre los homicidios cometidos durante el mes de enero. De acuerdo a la fuente, un total de 316 salvadoreños fueron asesinados durante ese mes, lo que significa que, en promedio, se cometieron 10.2 homicidios en todo el país, cifra que supera a la del mismo mes de 2005 y 2004, cuando se cometieron 297 y 190 asesinatos, respectivamente. El 10 de febrero, *La Prensa Gráfica* publicaba detalles de una entrevista realizada al presidente Antonio Saca. Al ser interrogado sobre el alto número de homicidios registrados en el país, el mandatario afirmó que “la gente conoce la lucha del gobierno contra la delincuencia”, razón por la cual —aseguró— su partido no saldría afectado en las elecciones del 12 de marzo. En ese mismo orden, el 12, la PNC lanzó el grupo antipandillas llamado Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES), con apenas 38 agentes que lucharían contra el accionar de las pandillas, combinando la inteligencia policial con la reacción inmediata. Trascendió que dicho grupo es una copia de las brigadas especiales de reacción inmediata de Francia.

El 13, la prensa nacional reveló que el informe del Instituto de Medicina Legal (IML) sobre las cifras de homicidios cometidos durante el año 2005 apunta a que el total fue de 3 mil 825, discrepando de los registros de la Policía Nacional Civil que reportó 3 mil 760 personas asesinadas el año pasado, 65 menos que los registros del IML. Al respecto, el ministro de Gobernación, René Figueroa, opinó que “si hemos firmado un convenio, si hemos estado trabajando de la mano [con el IML], nos damos por sorprendidos”. Por otro lado, Fabio Molina, quien funge como jefe de la Unidad de Estadística Forense

del IML, aseguró que sus cifras ya habían sido enviadas a la PNC y a la Fiscalía y que, por tanto, no entendía por qué no se habían incorporado. La prensa destacó que en El Salvador ocurrieron, en promedio, 55.5 asesinatos por cada 100 mil habitantes durante 2005. Esto lo hace el país más violento de Latinoamérica, arriba incluso de Colombia, que posee una tasa de 33.76 homicidios. Además, la fuente detalla que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el país padece una epidemia de homicidios, debido a que supera con creces los 10 asesinatos por cada 100 mil habitantes, que es la cota mínima permitida por ese organismo. “Esta es una epidemia criminal; entonces, lo que hay que hacer es una política criminológica”, opinó Alfredo Gavidia, director del Instituto de Medicina Legal.

El 21, FUSADES, tomando como base un estudio elaborado en conjunto con la Universidad de Salamanca, España, lanzó duras críticas al Órgano Judicial salvadoreño. De acuerdo al presidente de la fundación, Antonio Cabrales, ante las altas tasas de homicidios “debemos señalar que la pronta y cumplida justicia aún se encuentra en deuda en nuestro país, provocando así una inseguridad jurídica y ciudadana”.

Como se ha anotado arriba, el tema de la seguridad pública fue una constante durante los dos meses en consideración; de ahí que, el día 2 de marzo, los medios informativos nacionales hicieron eco del hecho que el departamento de Estado de Estados Unidos criticara la poca colaboración existente entre la Fiscalía y la Policía Nacional Civil, en cuanto al combate de las drogas, ya que el apoyo que la FGR le da a esta última es mínimo. Finalmente, debe reseñarse que al día siguiente, el 3, la PNC presentó el informe de homicidios cometidos durante el mes de febrero, destacando que hubo una disminución de 83 casos respecto del mes de enero. El subdirector de la Policía, Pedro González, comentó que hubo una disminución en el índice delincencial en los sectores de Sonsonate, Santa Tecla, Puerto de La Libertad, San Salvador, Soyapango, Mejicanos y Ciudad Delgado.

Para culminar la dinámica social hay que traer a discusión los temas relacionados a las migraciones, la salud pública y la vulnerabilidad socioambiental de buena parte de salvadoreños. Respecto de este último, el día 11 de febrero, el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) alertó sobre la amenaza de otra erupción en el volcán Ilimatepec. Según los estudios más recientes a la fecha, “se concluye que la actividad del volcán de Santa Ana sigue anómala”. Recuérdese que el macizo de occidente entró en fase eruptiva en octubre del año pasado, en plena emergencia por la llegada de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Stan.

En seguida, el 12, los medios de prensa revelaban detalles de un documento elaborado en conjunto por el SNET, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Centroamérica “José Siméon Cañas” (UCA). En el documento titulado *Caracterización del movimiento del suelo y sus efectos en la infraestructura durante los terremotos del 2001* se sostiene que los sismos causados por subducción —como el del 13 de enero de 2001— son causa de otros sismos de origen volcánico. Además, en el documento se advierte sobre la alta probabilidad de que el próximo terremoto volcánico ocurra al oriente del país, en la región cercana al Río Lempa, ya que se habría identificado la llamada zona de falla de El Salvador, que abarca unos 100 kilómetros cuadrados desde la región del Lago de Ilopango hasta el río Lempa. El informe señala también la vulnerabilidad característica de buena parte de la población que no cuenta con vivienda con control de calidad o normas de seguridad de vivienda.

Por otro lado, hasta el día siguiente, el 13 de febrero, el Ministerio de Salud Pública reportaba la muerte de 21 niños a causa de infecciones gastrointestinales. Según la fuente, se habían atendido cerca de 30 mil consultas debido a ese padecimiento. Ese mismo día, y volviendo sobre el tema de las migraciones al que se ha hecho mención con anterioridad, el Instituto Nacional de Migración de México informó sobre la repatriación de

unos 42 mil salvadoreños durante todo el año 2005. Dentro de ese grupo se encontraban unos 2 mil menores de edad, de acuerdo a la fuente. Sin embargo, las cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador no concuerdan, pues esa dependencia registró, en el mismo período, 35 mil 899 repatriados desde México y 7 mil 117 de Estados Unidos, según la prensa salvadoreña.

El 22, en el marco de una visita a EE.UU., el presidente Antonio Saca anunció la inminente prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los salvadoreños que trabajan en aquel país. “Una prórroga del TPS es algo muy positivo. Creo que vamos a recibir noticias positivas del presidente Bush, quien ha mostrado para El Salvador mucha admiración, así que yo estoy con una expectativa muy alta sobre este tema”, comentó el mandatario desde la ciudad de Miami. Saca completaría su gira en Washington, donde se reuniría con el secretario de Defensa de ese país, Donald Rumsfeld, y el presidente George W. Bush, en la Casa Blanca. Valga recordar que dicha gira y muestras de apoyo se dieron en la última fase de la campaña electoral, a escasos días de celebrar los comicios legislativos y municipales.

El 23 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas inglesas) corroboró el anuncio que hiciera el presidente salvadoreño respecto de la extensión del TPS por doce meses más. Hasta esa fecha, unos 225 000 salvadoreños se hallaban amparados al programa, según los registros del gobierno de EE.UU.. El periódico *La Prensa Gráfica* destacó las declaraciones del congresista cubano-americano Lincoln Díaz-Balart, quien calificó al presidente Saca como el gobernante más cercano a Washington en el subcontinente. “Tanto el gobierno de Estados Unidos, el Congreso y el presidente Bush ven no solo con buenos ojos, sino que están conscientes de que no tienen mejor amigo en Latinoamérica que el presidente Saca y el Gobierno de El Salvador”, dijo el congresista de ala republicana.

En definitiva, las notas sociales dominantes durante los meses de febrero y marzo de 2006 tuvieron que ver con lo reseñado arriba, es decir, la imparable ola de violencia, la situación de vulnerabilidad socioambiental, las pésimas condiciones de salud de muchos salvadoreños y el impacto de las migraciones en temas claves como el acceso al trabajo en Estados Unidos para los inmigrantes salvadoreños y sus posteriores envíos de remesas familiares.

Economía

En lo tocante a la dinámica de la economía más bien no hubo temas, salvo quizás lo del TLC con Estados Unidos, a los que la prensa nacional les diera un seguimiento sistemático. Lo que se impuso en ambos meses fueron hechos y acontecimientos dispersos. Ello pudo haberse debido a la preeminencia de la temática electoral. Así, el día 9 de febrero, representantes de FUSADES aseguraron que durante los últimos meses de 2005 se experimentó un crecimiento de todos los sectores económicos. De acuerdo a la fundación, dicho comportamiento estuvo emparejado con el alza de los precios internacionales del café y del azúcar, productos salvadoreños de exportación. Aún así, el economista de dicha institución, Roberto Rivera Campos, aseguró que dicha tendencia no necesariamente sería sostenible: “en estos últimos trimestres ha habido un repunte, pero no puede saber uno ya si se va a mantener”, puntualizó.

No hubo grandes noticias destacables, sino hasta fin de mes, cuando el 27, días antes de que entrara en vigencia el TLC entre Estados Unidos y El Salvador (conocido como CAFTA), primer país de la región en lograrlo, la ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, dijo que el CAFTA vendría a acelerar el crecimiento de la economía nacional. “Muchos productos van a venir y, en muchos casos, serán de mayor calidad y a mejores precios”, según la ministra. Por tanto, sumada a la nota anterior, se leía mucho optimismo en las esferas gubernamentales y empresariales respecto del rumbo próximo de la economía nacional.

Dicha tendencia continuaría a lo largo del mes de marzo, sobre todo por la entrada en vigencia del CAFTA, a partir del primer día de ese mes. La entrada en vigencia del tratado comercial abriría las puertas a un 89 por ciento de los productos agrícolas, y el 99.7 por ciento de los bienes industriales salvadoreños para que ingresen al mercado norteamericano sin pagar aranceles, destacó la prensa nacional. El 2, el sector de exportadores nacionales se mostró optimista ante la entrada en vigencia del CAFTA, debido a que, según dicho sector, el mismo permitiría un incremento de un 12 por ciento en sus exportaciones.

Finalmente, algunas notas relacionadas con la situación macroeconómica del país, las proyecciones de crecimiento y las remesas familiares. Y es que el 4 de marzo, la prensa salvadoreña destacó que la calificadora internacional de riesgo, Fitch Ratings, ratificó la estabilidad macroeconómica del país con perspectiva estable, dándole una nota de "BB+", sustentada en una baja deuda del sector público.

Luego, el 6, el presidente Antonio Saca proyectó un crecimiento económico de por lo menos un 5 por ciento para el final de su mandato, en 2009. Esta proyección la realizó con base en la entrada en vigencia del CAFTA, que permitiría un mayor índice de exportaciones en el mercado étnico. Por último, el día 15, el Banco Central de Reserva (BCR) comunicó que El Salvador recibió un 10 por ciento más de remesas durante los dos primeros meses del año. Las cifras ascienden a 425.4 millones de dólares entre enero y febrero, registrando un incremento de 42.1 millones de dólares, con respecto al mismo periodo de 2005, según la fuente. Así, pues, el mes de marzo culminaba con un optimismo gubernamental fundado en la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, pero a la par no se veían mejoras en la economía familiar de los salvadoreños, que siguieron resintiendo el alto costo de la vida y el estancamiento de los salarios, entre otros problemas ya señalados. Este es el saldo de ambos meses en materia económica.

Lo que dejaron los meses de febrero y marzo, en cuanto a lo político, está íntimamente ligado a los resultados electorales, que fueron más bien modestos. De modo que después de invertir energía y recursos enormes, ninguno de los dos partidos grandes consiguió lo que se propuso en las elecciones, aunque cada uno a su manera se esfuerza por presentar su mejor cara para disimular unos resultados modestos. Esto no significa que las pérdidas sean considerables, pero las ganancias dejaron insatisfechos a todos. Los datos del TSE apuntan una votación muy pareja para ambos. Desde esta perspectiva, los dos reunieron una cantidad de votos muy similar, de tal manera que atribuirse el ser la primera fuerza política del país es una imprecisión de los dos, cuyo fin es no defraudar a sus respectivas militancias.

Los dos partidos quedaron parejos en el número de diputados. Visto más de cerca, el FMLN tendría uno más que los que obtuvo en las elecciones del año 2003; pero ARENA obtuvo siete más. Es decir, este último partido habría sacado más diputados que el FMLN, otra cosa es que este haya recuperado los diputados perdidos a lo largo de esta legislatura, por sus divisiones internas. Desde esta perspectiva, ARENA habría avanzado más que el FMLN. Sin embargo, ninguno de los dos tiene la mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Para eso, tendrían que concertar con el Partido de Conciliación Nacional. Por lo tanto, ninguno de los dos, por sí mismo, podrá sacar adelante su agenda legislativa. Tal vez por eso, los dos hablan de diálogo y concertación, pero de antemano los dos sostienen que el otro lo rechaza. Esta actitud no augura más que un estancamiento legislativo, más polarización y más desgaste. En la votación cualificada, el FMLN gozará de una ventaja de la cual carece en esta legislatura. Sus votos serán necesarios para alcanzar esa mayoría. Esta ventaja no le viene dada por el aumento significativo de la votación, sino por la configuración de la nueva legislatura.

Ante los resultados electorales, el tiempo que los partidos y el gobierno de ARENA dedicaron a la campaña, el bombardeo al que

sometieron a la ciudadanía durante semanas, las continuas intervenciones públicas de sus candidatos y la intervención directa del presidente Saca no arrojaron los frutos que podrían haberse esperado. Al contrario, la abstención ha sido demasiado elevada para el esfuerzo hecho. Es cierto que la abstención es común en las democracias, pero, hasta el último minuto, el gobierno de ARENA y todos los partidos hablaron de votación masiva, de gran entusiasmo y de mucho interés en la elección. Si a esto se agrega que la mayoría de los electores decidió su voto antes del comienzo de la campaña, el esfuerzo y el derroche de recursos son un sin sentido.

Finalmente, hay que volver sobre el debilitamiento de la institucionalidad del país, al término del proceso electoral. Y es que aquella ha salido más debilitada por el mismo presidente Saca, por su doble papel de presidente de la República y de ARENA. El mandatario se presentó en las actividades partidarias como presidente de ARENA, pero hizo promesas en cuanto presidente de la República. Su discurso fue tan violento y demagógico como el de cualquier dirigente tradicional de ARENA, pero nunca dejó de fungir como presidente de la República. Defendió los intereses de ARENA como cualquier dirigente entregado, pero usó el poder del presidente de la República para imponerlos.

Lo más probable es que la Corte Suprema de Justicia no se atrevera a declarar inconstitucional su intervención. La Asamblea Legislativa no tiene poder político para pedirle cuentas. El Fiscal General tampoco actuará de oficio y el Tribunal Supremo Electoral ya dio la vuelta a la página. Alegar la práctica de países como Estados Unidos es impropio, pues Saca pedía el voto para él, mientras que los presidentes estadouni-

denses lo piden para el candidato. A juzgar por los resultados, el mensaje presidencial que acusaba al FMLN de todos los males del país no penetró. ARENA no solo no alcanzó sus metas, sino que la correlación de fuerzas de la próxima legislatura será aún más complicada que la actual. La gobernabilidad, el gran argumento para pedir una Asamblea Legislativa controlada por ARENA, será aún más difícil por el desprestigio de la credibilidad y la autoridad presidencial. Los tres años que le quedan al frente del poder ejecutivo serán aún más tortuosos que los dos primeros.

Así lo muestran las prisas por conseguir la aprobación legislativa de varios préstamos por más de 300 millones de dólares, por elegir al Fiscal General y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, eventualmente, una reforma electoral que implicaría modificar la Constitución. Por otro lado, el presidente inició una nueva ronda de diálogo con las dirigencias de los partidos políticos, al igual que lo hizo al comienzo de su mandato, para limar asperezas. Desde entonces hasta ahora, confiado en que se trataba de un compás de espera, mientras acumulaba fuerzas para apoderarse de la Asamblea Legislativa, los desprecio. Ante el fracaso de su plan, el presidente ha comenzado de nuevo, pero, a diferencia de entonces, con mucho menos credibilidad y legitimidad. Por eso, el FMLN no acudirá a la cita, sino que negociará en el seno legislativo. Tampoco volverá a la mesa de gobernabilidad, la cual ahora tiene menos representatividad que antes, por el desgaste experimentado por el presidente Saca. En definitiva, el mandatario se encuentra en un enorme aprieto, tiene menos poder, menos credibilidad y autoridad, y para gobernar no solo necesita del PCN, sino también del FMLN, su adversario histórico.